**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
4081/2016
QUEJOSO Y RECURRENTE: MARIO
TINAJERO LÓPEZ**

**PONENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ
SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: NATALIA REYES
HEROLES SCHARRER
COLABORÓ: HÉCTOR GUSTAVO PINEDA SALAS**

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día **veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.**

**VISTOS; y
RESULTANDO:**

PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el quince de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes Común 11 para Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, **Mario Tinajero López**, por propio derecho, promovió demanda de amparo directo en contra de la sentencia dictada el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, en el toca *********, por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en su carácter de ordenadora, y del Juez Decimonoveno de lo Civil de la Ciudad de México, en su carácter de ejecutora.¹

¹ Folios 4 a 124 del expediente del amparo directo D.C. *********

SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. El quejoso señaló como derechos constitucionales vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20, Apartado C, fracciones II, IV, VI y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

TERCERO. Trámite y resolución del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo Presidente, por auto de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, la admitió a trámite y la registró con el número **D.C. *******; dio intervención al Ministerio Público Federal y reconoció el carácter de terceros interesados a **Graciela Cárdenas Fuentes de Guerra y José Luis Guerra Carranza.**²

Seguidos los trámites legales correspondientes, el ocho de junio de dos mil dieciséis, el referido Tribunal Colegiado dictó la sentencia respectiva, en la que determinó **negar** la protección constitucional solicitada.³

CUARTO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con la anterior resolución, **Mario Tinajero López**, por propio derecho interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el treinta de

² Folios 139 a 142 del expediente del amparo directo **D.C. *******

³ Folios 180 a 299 del expediente del amparo directo **D.C. *******

junio de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.⁴

QUINTO. Trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de doce de julio de dos mil dieciséis, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación registró y admitió a trámite el recurso de revisión con el número **4081/2016**, con la reserva del estudio de importancia y trascendencia que en el momento procesal oportuno se realizara; asimismo, determinó que se turnaran los autos a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández y ordenó su envío a la Sala de su adscripción.⁵

SEXTO. Radicación en Sala. Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, el Presidente de la Primera Sala tuvo por recibidos los autos del asunto, determinó el avocamiento y los envió a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.⁶

SÉPTIMO. Publicación del proyecto de resolución. El proyecto de sentencia con el que se propuso resolver el presente asunto fue publicado dentro del plazo y con las formalidades previstas en los artículos 73 y 184 de la Ley de Amparo, por versar sobre un problema de constitucionalidad.

CONSIDERANDO:

⁴ Folios 3 a 34 del expediente del amparo directo en revisión 4081/2016.

⁵ Folios 36 a 39 del expediente del amparo directo en revisión 4081/2016.

⁶ Folio 66 del expediente del amparo directo en revisión 4081/2016.

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96, de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de este Máximo Tribunal, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito al conocer de un amparo directo en materia civil, la cual corresponde a la especialidad de esta Primera Sala; además, se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno en su resolución.

SEGUNDO. Oportunidad. Conforme al artículo 86 de la Ley de Amparo el recurso de revisión en amparo directo se interpondrá por conducto del Tribunal Colegiado de Circuito, que haya dictado la resolución recurrida dentro del plazo de diez días.

La sentencia impugnada se notificó por lista a la parte recurrente el dieciséis de junio de dos mil dieciséis,⁷ dicha notificación surtió efectos el diecisiete de ese mes y año; por tanto, el plazo de diez días transcurrió del veinte de junio al uno de julio de dos mil dieciséis, descontándose los días veinticinco y veintiséis de junio, por ser inhábiles en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

⁷ Folio 299 vuelta del expediente del amparo directo D.C. *****

En ese sentido, si el escrito de expresión de agravios se presentó el treinta de junio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, debe considerarse que su interposición fue oportuna.

TERCERO. Legitimación. El recurso de revisión fue interpuesto por **Mario Tinajero López**, por propio derecho, quien tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo en el que se dictó la resolución que se impugna, por lo que está legitimado para interponer el recurso de revisión.

CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Para la resolución del presente asunto se hace una relación, en lo que interesa, de los antecedentes del caso, de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, de las consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito y de los argumentos expuestos en vía de agravios.

I. Antecedentes

Juicio ordinario civil de origen. Por escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil catorce, ante la Oficialía de Partes Común número 19 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, **Graciela Cárdenas Fuentes de Guerra** y **José Luis Guerra Carranza**, por su propio derecho,

demandaron de **Mario Tinajero López**, en la vía ordinaria civil, las siguientes prestaciones:

*“A).- La rendición de cuentas pormenorizada que realice el **C. Mario Tinajero López** a los suscritos, en virtud del mandato que le fue conferido por los suscritos por medio de la Escritura Pública Número ***** de fecha 23 de Julio del año 2010, otorgada ante la fe del Notario Público Número 63 del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) *****, desde la fecha en que le fue conferido dicho mandato, hasta la fecha en que le fue revocado el mismo y en términos de lo dispuesto por el artículo 520 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).*

*B).- Informe el **C. Mario Tinajero López** a los suscritos todas sus actuaciones referentes al inmueble sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio ubicado en la ***** (ahora Ciudad de México) lo anterior en virtud de la revocación del mandato que le fue conferido por los suscritos por medio de la Escritura Pública Número ***** de fecha 23 de Julio del año 2010, otorgada ante la fe del Notario Público Número 63 del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) *****, debiendo realizar ello desde la fecha en que fue le (sic) conferido dicho mandato, hasta la fecha en que le fue revocado el mismo.*

*C).- Informe y entregue el **C. Mario Tinajero López**, a los suscritos, toda clase de contratos y convenios que haya celebrado referente al inmueble ubicado en la Calle de ***** (ahora Ciudad de México) lo anterior en virtud de la revocación del mandato que le fue conferido por los suscritos por medio de la Escritura Pública Número ***** de fecha 23 de Julio del año 2010, otorgada ante la fe del Notario Público Número 63 del Distrito Federal (ahora Ciudad de México). *****, debiendo realizar ello desde la fecha en que le fue conferido dicho mandato, hasta la fecha en que le fue revocado el mismo.*

*D).- Entregue el **C. Mario Tinajero López** a los suscritos todos los pagarés firmados a favor de sí mismo y a favor de los suscritos, anticipos y pagos recibidos en razón de los contratos y convenios celebrados referente al inmueble*

ubicado en la ***** (ahora Ciudad de México); lo anterior en virtud de la revocación del mandato que le fue conferido por los suscritos por medio de la Escritura Pública Número ***** de fecha 23 de Julio del año 2010, otorgada ante la fe del Notario Público Número 63 del Distrito Federal (ahora Ciudad de México). ***** , debiendo realizar ello desde la fecha en que le fue conferido dicho mandato, hasta la fecha en que le fue revocado el mismo.

E).- La desocupación y entrega que haga el **C. Mario Tinajero López** a los suscritos, de la Oficina de Administración ubicada en el ***** de esta Ciudad; lo anterior en virtud de la revocación del mandato que le fue conferido por los suscritos por medio de la Escritura Pública Número ***** de fecha 23 de Julio del año 2010, otorgada ante la fe del Notario Público Número 63 del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) ***** .

F).- La entrega que haga el **C. Mario Tinajero López** a los suscritos del primer testimonio de la Escritura Pública Número ***** de fecha 23 de Julio del año 2010, otorgada ante la fe del Notario Público Número 63 del Distrito Federal (ahora Ciudad de México). ***** , y que contiene el poder General para pleitos y cobranzas y actos de administración limitado que le fue conferido a éste por los suscritos; ello en virtud de la revocación que le fue hecha por los suscritos al **C. Mario Tinajero López** de dicho mandato.

G).- Los gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio”.

El Juez Décimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, registró la demanda con el número *****; previa aclaración, la admitió en la vía y forma propuesta y ordenó emplazar al demandado.

Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil quince, **Mario Tinajero López**, por propio derecho, dio contestación a la misma y reconvino de la parte actora las siguientes prestaciones:

*“A).- La declaración judicial que haga su señoría en sentencia definitiva, en el sentido de que ha operado a mi favor la prescripción adquisitiva (usucapión) del inmueble ubicado en *****.*

B).- La declaración judicial que haga su señoría en sentencia definitiva, en la que se declare que el suscrito se ha convertido en propietario de dicho inmueble, por haber operado a mi favor la prescripción positiva, usucapión.

*C).- Se declare que la sentencia definitiva dictada en este juicio, una vez que cause ejecutoria, me sirva de título de propiedad y se mande inscribir a mi favor, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, en la partida, folio, tomo y libro correndientes (sic) documento notarial que obra en autos del presente juicio y se cancele lo que obra a favor de los señores **Graciela Cárdenas Fuentes de Guerra** y **José Luis Guerra Carranza**, previo el pago de los derechos correspondientes”.*

Seguido el juicio por sus trámites, con fecha veintiséis de junio de dos mil quince, el Juez Decimonoveno de lo Civil del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, dictó sentencia al tenor de los puntos resolutivos siguientes:

*“PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ordinaria civil, en la que la parte actora **Cárdenas Fuentes de Guerra Graciela y Guerra Carranza José Luis**, acreditaron su acción; y la parte demandada **Tinajero López Mario** no justificó sus excepciones.*

*SEGUNDO.- Se condena a la parte demandada **Tinajero López Mario** a la (sic) rendir las cuentas pormenorizadas a la parte actora **Cárdenas Fuentes de Guerra Graciela y Guerra Carranza José Luis**, en virtud del mandato que le*

fue conferido por medio de la escritura pública número ciento un mil novecientos noventa cinco (*****) de fecha veintitrés de julio del dos mil diez, desde esta fecha y hasta el día once de septiembre del dos mil catorce, dentro del término de cinco días, contados a partir de que la presente resolución sea ejecutable, apercibido que en caso de no hacerlo, se emplearan las medidas de apremio previstas en la Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil a que diera lugar con su abstención, atento a lo previsto por la fracción I del artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). TERCERO.- Se condena a la parte demandada **Tinajero López Mario** a informar a la parte actora, todas las actuaciones que haya efectuado respecto del inmueble sujeto a Régimen de Propiedad en Condominio, ubicado en ***** de México, Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en el período comprendido del veintitrés de julio del dos mil diez y hasta el día once de septiembre del dos mil catorce, dentro del término de cinco días, contados a partir de que la presente resolución sea ejecutable, apercibido que en caso de no hacerlo, se emplearán las medidas de apremio previstas en la Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil a que diera lugar con su abstención, atento a lo previsto por la fracción I del artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). CUARTO.- Se condena a la parte demandada **Tinajero López Mario** a informar y entregar a la parte actora, toda clase de contratos y convenios que haya celebrado, respecto del inmueble sujeto a Régimen de Propiedad en Condominio, ubicado en ***** (ahora Ciudad de México) en el período comprendido del veintitrés de julio del dos mil diez, y hasta el día once de septiembre del dos mil catorce, dentro del término de cinco días, contados a partir de que la presente resolución sea ejecutable, apercibido que en caso de no hacerlo, se emplearán las medidas de apremio previstas en la Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil a que diera lugar con su abstención, atento a lo previsto por la fracción I del artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).

QUINTO.- Se condena a la parte demandada **Tinajero López Mario** a entregar a la parte actora, las cantidades que resulten a su favor por concepto de anticipos y pagos recibidos en razón a los contratos y convenios celebrados, que haya recibido en virtud de su encargo, respecto del inmueble sujeto a Régimen de Propiedad en Condominio, ubicado en ***** (ahora Ciudad de México) en el período comprendido del veintitrés de julio del dos mil diez y hasta el día once de septiembre del dos mil catorce, previa liquidación y acreditamiento en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo.

SEXTO.- Se condena a la parte demandada **Tinajero López Mario** a entregar a la parte actora los pagarés suscritos a favor de sí mismo y a favor de la parte actora, en razón a los contratos y convenios celebrados respecto del inmueble sujeto a *****, que en su caso se hubiesen suscrito, en el período comprendido del veintitrés de julio del dos mil diez y hasta el día once de septiembre del dos mil catorce, dentro del término de cinco días, contados a partir de que la presente resolución sea ejecutable, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se emplearan las medidas de apremio previstas en la Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil a que diera lugar con su abstención, atento a lo previsto por la fracción I del artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).

SÉPTIMO.- Se condena a la parte demandada **Tinajero López Mario** a desocupar y entregar a la parte actora la Oficina de Administración ubicada en el *****, dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que la presente resolución sea ejecutable, con el apercibimiento de ser lanzado a su costa si no lo efectúa voluntariamente.

OCTAVO.- Se condena a la parte demandada **Tinajero López Mario** a entregar a la parte actora el primer testimonio de la escritura pública número ciento un mil novecientos noventa y cinco (*****) de fecha veintitrés de julio del dos mil diez, que contiene el Poder General para Pleitos v Cobranzas y Actos de Administración, Limitado, dentro del término de cinco días, contados a partir de que la presente resolución sea ejecutable, con el

apercibimiento que en caso de no hacerlo, se emplearan las medidas de apremio previstas en la Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil a que diera lugar con su abstención, atento a lo previsto por la fracción I del artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).

*NOVENO.- En la reconvencción intentada por el actor reconvenccionista **Tinajero López Mario**, el mismo no justificó su acción reconvenccional, mientras que los demandados reconvenidos **Cárdenas Fuentes de Guerra Graciela y Guerra Carranza José Luis** justificaron su excepción.*

*DÉCIMO.- Se absuelve a los demandados reconvenidos **Cárdenas Fuentes de Guerra Graciela y Guerra Carranza José Luis Federal** (sic) del cumplimiento de las prestaciones reclamadas en la reconvencción planteada en su contra por el actor reconvenccionista **Tinajero López Mario**.*

DÉCIMO PRIMERO.- No se hace condena en costas en el presente Juicio.

DÉCIMO SEGUNDO.- Notifíquese”.

Inconforme con la resolución anterior, la parte **demandada Mario Tinajero López**, por propio derecho, interpuso recurso de apelación del que conoció la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien lo resolvió en el toca número *********, el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, siendo sus puntos resolutivos los siguientes:

*“PRIMERO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiséis de junio del año dos mil quince, dictada por el C. Juez Décimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, en los autos del juicio ordinario civil seguido por **Cárdenas Fuentes de Guerra Graciela y José Luis Guerra Carranza en contra de Tinajero López Mario**, expediente*

SEGUNDO.- Se condena al demandado apelante al pago de las costas de ambas instancias.

TERCERO.- Notifíquese y agréguese copia autorizada de la presente resolución en el legajo correspondiente. Con testimonio de la misma devuélvanse los documentos y los autos principales a su juzgado de origen y en su oportunidad archívese el toca como asunto totalmente concluido”.

Juicio de amparo directo. En contra de la resolución antes descrita, **Mario Tinajero López**, promovió el juicio de amparo cuya sentencia se revisa. Como se observa a continuación, en la demanda respectiva la parte quejosa hizo valer **conceptos de violación** relativos a cuestiones de legalidad. Manifestó, en esencia, lo siguiente:

- En el **primer concepto de violación** el quejoso sostuvo que las autoridades responsables violaron los artículos 1º, 14, 16 y 17 constitucionales afectando su esfera jurídica relativa a la tutela judicial efectiva, porque aun y cuando existen elementos de forma que la norma sustantiva contempla, no podían limitarse a un elemento normativo para establecer un criterio que no permite un análisis de fondo de las situaciones jurídicas y fácticas que dieron origen a la litis resuelta, dejando a un lado la obligación constitucional en relación a la protección de los derechos humanos de las partes.

Expuso que la resolución reclamada vulnera sus derechos humanos porque se fundó en elementos

normativos rigoristas que no permitieron a la responsable allegarse de los elementos necesarios para establecer una solución congruente a la litis, lo que vulnera el derecho de la tutela judicial efectiva.

Consideró que la Sala responsable se limitó a un análisis formalista, situación que denota la desproporción en relación a sus derechos, faltando al análisis de las constancias integrantes del expediente del juicio principal y del toca de apelación, cuando atendiendo al nuevo paradigma constitucional, en relación a la protección de los derechos humanos, debió allegarse de los elementos necesarios a fin de emitir los fallos correspondientes.

Asimismo, afirmó que la autoridad responsable estaba obligada a respetar el principio *pro persona*, el cual vela por la aplicación de la norma siempre que beneficie a los sujetos respecto de los cuales se aplica.

Finalmente, adujo que la actuación de la responsable generó perjuicio al inconforme porque no acató las obligaciones contempladas en la Constitución Federal y afectó el adecuado acceso a la justicia, porque aun y con elementos probatorios existentes acreditaba situaciones jurídicas respecto de las que no existe pronunciamiento alguno y existe evidencia que la

parte tercero interesada no acreditó los elementos necesarios para probar sus pretensiones.

- En el **segundo concepto de violación**, argumentó que la sentencia reclamada adolece de congruencia externa porque el juzgador resolvió que, a la luz de las manifestaciones de la parte actora y del inconforme se expuso la existencia de copropietarios, por lo que tuvo que llamárseles para evitar la posible vulneración de derechos de terceros y que la parte actora exigió una conducta positiva del quejoso consistente en la entrega de cuentas e informes del inmueble comercial controvertido, en base al mandato que consta en la escritura ciento un mil novecientos noventa y cinco, de veintitrés de julio del dos mil diez, en la que consta el poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración limitado, que los actores le otorgaron.

Refirió que el objeto principal del mandato fue realizar todas las gestiones tendientes a constituir, sobre el inmueble objeto de administración, el régimen de propiedad en condominio, por lo que desde la fecha del otorgamiento, el veintitrés de julio del dos mil diez, estaba facultado para administrar las unidades privativas y gestionar y cobrar los pagos que surgieran con motivo de las ventas celebradas entre los mandantes y terceros, por lo que el objeto del

mandato fue la intención de vender las unidades privativas que se formaran; por lo que, desde el inicio del mandato, debe prevalecer la presunción de que empezaron a realizarse ventas de los indivisos o locales comerciales que iban resultando durante la gestión del mandatario.

Asimismo, señaló que los coactores no mencionaron que existieran contratos de compraventa de los indivisos, previos a la constitución del régimen de propiedad en condominio del inmueble objeto de administración; sostiene que fue un acto de mala fe la declaración unilateral de la voluntad que los actores hicieron en la escritura ciento ocho mil setecientos sesenta y nueve de cinco de noviembre del dos mil trece, porque en las cláusulas y declaraciones unilaterales ante fedatario público no mencionaron algún dato que indicara que ya existían copropietarios sobre las unidades privativas.

- En el **tercer concepto de violación**, el quejoso manifestó que la resolución reclamada viola sus derechos humanos porque no se analizaron y valoraron debidamente las constancias del expediente del juicio de origen y del toca *********, lo que llevó a las responsables a apreciar indebidamente la naturaleza jurídica de las actuaciones del juicio

natural, porque el juicio de rendición de cuentas se originó como consecuencia del mandato o poder notarial para actos de administración, pleitos y cobranzas limitado, otorgado al quejoso en la escritura ciento un mil novecientos noventa y cinco, expedida por el notario sesenta y tres de la Ciudad de México, instrumento que no se valoró debidamente en cuanto a su origen y naturaleza jurídica.

Refirió que en la audiencia de desahogo de la prueba confesional a su cargo indicó que los actores ya no eran los únicos dueños del inmueble controvertido y que en el incidente criminal exhibido ante la Sala responsable manifestó la asociación en participación que tenía con los actores y que en ese acto jurídico le había sido otorgado el poder notarial para actos de administración, pleitos y cobranzas limitado del inmueble citado.

Adujo que no fueron valorados los recibos de pago en moneda nacional y extranjera que sus contrapartes recibieron, y que si bien los exhibió en copia simple, debieron valorarse y que, además, desde la contestación de demanda advirtió a las responsables que estaba imposibilitado para presentar los originales, porque se encontraban ante una autoridad de control constitucional, derivado del amparo

1230/2014 radicado en el Juzgado Decimocuarto en materia de Amparo Penal, interpuesto por temor a ser privado de su libertad por actos del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 4 en la averiguación previa ***** donde los actores lo denunciaron por el delito de administración fraudulenta, habiendo también manifestado que el derecho de propiedad de los terceros interesados ya no era pleno, porque no eran los únicos dueños del inmueble controvertido, y que eran socios en participación, lo que las responsables no valoraron.

Señaló que los contratos de compraventa, servicios profesionales y obra determinada, exhibidos en copias simples durante el procedimiento, no fueron valorados por las autoridades responsables y están relacionados con el poder notarial materia del juicio natural y con la asociación en participación manifestada.

- En el **cuarto concepto de violación**, alegó que el Juez de Primera Instancia vulneró su garantía de debido proceso, porque en el auto de veintisiete de abril de dos mil quince, no admitió las pruebas documentales, testimoniales y pericial que ofreció, bajo el argumento de que fueron extemporáneas, lo cual, a su juicio, fue equivocado porque según las constancias integrantes del expediente del juicio, el

ofrecimiento de pruebas lo realizó el veinte de abril de dos mil quince, esto es, dentro del término de diez días, el cual inició el siete de abril de dos mil quince y concluyó el veinte del mismo mes y año, por lo que la actuación del Juez de origen fue errónea.

Expuso que conforme con la nueva visión en relación a la protección de los derechos humanos, las autoridades jurisdiccionales, según el artículo 1º constitucional, están obligadas a analizar las situaciones que permitan una protección debida de esos derechos, para lo cual deben atender a la norma aplicable al caso concreto, sea de derecho interno o se encuentre establecida en ordenamientos supranacionales respecto de los cuales el Estado Mexicano sea parte, lo que en el caso concreto no sucedió, deparándole perjuicio la omisión de las autoridades responsables.

Sostuvo que la violación procesal es relevante porque sus consecuencias trascienden dentro del juicio, porque tanto el Juez inferior como el Tribunal de Alzada no contaron con los elementos necesarios para emitir las resoluciones reclamadas, teniendo facultades para allegarse de las pruebas necesarias para dirimir la controversia.

Indicó que la actuación que reclama se traduce en un error judicial, que cobra relevancia constitucional porque lo emitieron autoridades jurisdiccionales, quienes pronunciaron un proveído carente de sustento; que el Juez de Primera Instancia, al determinar extemporáneas las pruebas que el quejoso ofreció se apartó de la realidad porque computó el término para el ofrecimiento de pruebas de forma diversa al establecido en la ley sustantiva, esto es, que la certificación contenida en el expediente y el cómputo no coinciden, siendo el error patente, manifiesto y verificable.

Afirmó que, al ser patente el error judicial, el Tribunal Colegiado tiene facultad para determinar su existencia y resolver respecto de la inconstitucionalidad del actuar de las autoridades responsables, para que se respeten sus derechos humanos y se le otorgue oportunidad de ofrecer las pruebas necesarias para contar con una defensa adecuada.

Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito negó el amparo y protección de la Justicia Federal y en lo que al caso interesa, sostuvo lo siguiente:

- Consideró que resultaban inoperantes e infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso.
- Calificó inoperante el cuarto concepto de violación. Sostuvo que de las constancias del expediente del juicio de origen se advertía que el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil quince, en el cual el Juez de Primera Instancia asentó que tenía al demandado, hoy quejoso, ofreciendo las pruebas, resultaba extemporáneo dicho ofrecimiento conforme al cómputo del término para este efecto que sólo admitía la confesional a cargo de los actores, con fundamento en el artículo 308 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) no así la testimonial, la pericial y las documentales que acompañaba a dicho escrito, según lo dispuesto por el artículo 296 del citado Código. Respecto de los documentos que ya obraran en actuaciones, así como la presuncional e instrumental de actuaciones refirió que lo anterior no fue objeto de impugnación por el solicitante del amparo durante el procedimiento a través del recurso de apelación previsto por el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

En efecto, sostuvo que, al no promoverse por el quejoso el recurso de apelación previsto por el ordenamiento procesal civil señalado en contra del acuerdo de fecha

veintisiete de abril de dos mil quince, devenía inconcuso que el mismo se conformó con la referida determinación del Juez primary y por lo consiguiente, eran inoperantes los argumentos en que se duele de que dicho juzgador, por un error, no admitió las pruebas que propuso, entre ellas, la testimonial y la pericial en contabilidad, y por dicha razón se impidió a este Tribunal Federal emitir consideraciones al respecto, debido a que no se satisfizo lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De este modo, estableció que como no se preparó la violación procesal de la que el quejoso se duele y el mismo no se situaba en alguna de las hipótesis de excepción que contempla el párrafo segundo del artículo 171 de la Ley de Amparo, porque el asunto no era de aquellos en los que se afectarían derechos de menores o incapaces, tampoco fue promovido ni se relacionaba con el estado civil de las personas, con el orden o estabilidad de la familia, ni el quejoso era ejidatario, comunero, trabajador, ni lo promovía un núcleo de población ejidal o comunal y el impetrante del amparo no demostró que por condiciones de pobreza o marginación se encontrara en clara desventaja social para emprender un juicio; como sólo podían formar parte de la materia del amparo directo, las infracciones resultantes al final del tránsito

por la sustentación y decisión del recurso ordinario correspondiente, el cual el inconforme no agotó en contra del auto que no admitió los medios de prueba que propuso, se imposibilitaba a ese Tribunal Colegiado el pronunciamiento relativo a los argumentos de queja de naturaleza procesal planteados; razón insalvable de su inatendibilidad y por tanto de su inoperancia.

Recurso de Revisión. En contra de lo determinado en la ejecutoria de amparo, el quejoso interpuso el recurso de revisión que se analiza en esta instancia. En el escrito de **agravios** la parte quejosa recurrente plantea lo siguiente:

- En el **primer agravio**, sostiene que le causa agravio la aplicación e indebida fundamentación en la que incurre el Tribunal Colegiado, porque al establecer como fundamento de su actuar el artículo 171 de la Ley de Amparo, transgrede sus derechos contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 133 constitucionales.

Señala que, al calificar como inoperantes los argumentos hechos valer en contra de la resolución reclamada, bajo la premisa de que se conformó con la determinación emitida por el Juez de Primera Instancia, se establece como prescrito el derecho de reclamo que le asiste en relación con violaciones procesales que, por

su sola naturaleza, se reflejan en violaciones a derechos humanos.

Considera que el Tribunal Colegiado viola en su perjuicio el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, ya que deja de observar el contenido del artículo 1º de la Constitución, porque los argumentos formulados en el escrito de amparo no fueron debidamente analizados bajo el principio de progresividad de los derechos humanos, por lo que es inexacto que bajo un tecnicismo normativo el Tribunal invoque una limitación de análisis, siendo que la violación procesal alegada trasciende a nivel constitucional.

Estima que, aun cuando el Tribunal Colegiado fundamenta su resolución en el artículo 171 de la Ley de Amparo, pudo ejercer su facultad de control concentrado a fin de inaplicar dicho numeral, aun y cuando el mismo no hubiese sido motivo de la litis originaria, con el objeto de garantizar una adecuada protección de sus derechos humanos, atendiendo al principio *pro homine*.

Indica que los Tribunales Colegiados de Circuito están obligados a realizar un análisis y estudio de las violaciones procesales hechas valer por los recurrentes e incluso las que se adviertan de manera ex officio, de

conformidad con lo establecido en el artículo 107 constitucional. Asimismo, afirma que la sentencia recurrida es violatoria de los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo y por ende, de los principios de exhaustividad y congruencia.

- En el **segundo agravio** argumenta que el artículo 171 de la Ley de Amparo es inconstitucional, en virtud de que establece hipótesis normativas que el artículo 107 de la Constitución Federal no regula, pues el referido precepto constitucional establece la obligación de análisis de las violaciones procesales que se hubieren reclamado o incluso aquellas que se advirtieren ex officio.

A partir de lo anterior, sostiene que el artículo reclamado vulnera los principios de reserva de Ley y subordinación, pues el Poder Legislativo Federal no se encuentra facultado para establecer limitantes que no estén previstas en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, ya que al tratarse de una ley reglamentaria, esta debe observar los parámetros fijados por los preceptos constitucionales creados por el constituyente; aunado a que de conformidad con el principio de progresividad de los derechos humanos, una ley reglamentaria que condiciona la protección de derechos fundamentales no debe estar por encima del precepto constitucional que regula, atendiendo a la protección de

los derechos humanos contenida en el artículo 1º constitucional.

También aduce que la limitación prevista en el artículo 171 de la Ley de Amparo vulnera los artículos 1º y 14 de la Constitución Federal, ya que atendiendo al derecho de tutela judicial efectiva y debido proceso, los impartidores de justicia se encuentran obligados al análisis de las normas, e incluso de su rigidez o flexibilidad según sea el caso, aunado a que deben evitar que se dilate la impartición de justicia.

Finalmente, establece que una violación procesal catalogada como “error judicial”, que es verificable en un análisis de constitucionalidad, no debe exigir al gobernado que se combata dicha figura a través de los recursos ordinarios previstos en las leyes del procedimiento como presupuesto para que los órganos de control constitucional estén en posibilidad de entrar al estudio de dicha figura, ya que ello equivaldría a dejar en manos del gobernado la tutela judicial efectiva y el desarrollo de un debido proceso, lo cual vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos y se traduciría en obligar a los gobernados a preparar la violación procesal de “error judicial”, que es distinta a los “actos consentidos” en su naturaleza jurídica.

- En el **tercer agravio** alega que el Tribunal Colegiado en la sentencia recurrida analiza que el quejoso es un adulto mayor e incluso invoca la declaración de Brasilia, además tiene por cierto que se encuentra enfermo de diabetes y a pesar de ello, le niega la suplencia de la queja, afirmando que la suplencia únicamente opera para menores de edad e incapaces.

Afirma que tiene acreditado ser un adulto mayor y contar con especial dificultad en razón de sus capacidades funcionales para ejercitar sus derechos, situación que debe ser valorada en el presente asunto y que pasó inadvertido por el Tribunal Colegiado, argumentando que el expediente clínico que se anexó a la demanda de amparo era novedoso en relación al juicio natural, cuando de un correcto ejercicio de control de constitucionalidad las autoridades de oficio debieron haber analizado que es una persona adulta mayor y que se encuentra en un grupo de vulnerabilidad.

QUINTO. Procedencia. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen que el recurso de revisión en amparo directo es procedente cuando se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, cuando se establece la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados

internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de tales cuestiones, a pesar de haber sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno.

A partir de esas premisas, para que el recurso de revisión en amparo directo sea procedente, es necesario que se cumplan los requisitos siguientes:

- a) Que el tribunal colegiado resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.
- b) Que el problema de constitucionalidad señalado en el inciso anterior entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales del Pleno.

Al respecto, el punto primero del Acuerdo General 9/2015 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, señala:

“PRIMERO. El recurso de revisión contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción IX, constitucional, y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, si se reúnen los supuestos siguientes:

a) Si en ellas se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo, y

b) Si el problema de constitucionalidad referido en el inciso anterior entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.”

En términos del punto segundo del acuerdo mencionado, se entenderá que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando habiéndose

surtido los requisitos del inciso a) anterior, se advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.

Ahora bien, en términos de la tesis 1a. CCXLI/2013 (10a.) emitida por esta Primera Sala, de rubro: **“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA IMPUGNAR DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO A TRAVÉS DE ESTE RECURSO”**, también se puede actualizar la procedencia del recurso de revisión en amparo directo cuando se cuestiona la constitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo.⁸

Aplicando lo anterior al caso concreto, resulta que el recurso de revisión en cuestión es procedente pues, por un lado, el recurrente planteó en vía de agravios la inconstitucionalidad del artículo 171 de la Ley de Amparo, por lo que subsiste una cuestión propiamente constitucional y por el otro, en cuanto al segundo requisito, esta Sala advierte que el asunto reviste las características de importancia y trascendencia porque implica la fijación de un criterio sobre la constitucionalidad del artículo 171 de la Ley de Amparo.

SEXTO. Estudio. Se procederá a analizar los agravios expuestos en el escrito de revisión; por cuestión de metodología se estudiarán en un orden distinto al que fueron planteados.

⁸ Décima Época. Registro: 2004320. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1. Materia(s): Común. Tesis: 1a. CCXLI/2013 (10a.). Página: 745.

1. Primero y segundo agravio

Como se refirió previamente, en el **segundo agravio**, sostiene que el artículo 171 de la Ley de Amparo es inconstitucional en virtud de que la limitación ahí prevista vulnera el derecho de *tutela judicial efectiva*, pues en términos del artículo 1° constitucional los juzgadores están obligados a analizar los contenidos normativos y evitar la dilación de justicia.

También refiere que el precepto es inconstitucional al vulnerar los *principios de reserva de ley y subordinación*, pues el Poder Legislativo Federal no está facultado para establecer en la Ley Reglamentaria limitantes que no estén previstas en los artículos 103 y 107 de la Constitución.

Finalmente argumenta la inconstitucionalidad del artículo 171 de la Ley de Amparo por considerar que, ante una violación procesal catalogada como "*error judicial*", no puede exigírsele al gobernado que lo combata a través de los recursos ordinarios como presupuesto para que los órganos de control constitucional puedan estudiarlo.

Por otro lado, en el **primer agravio**, el recurrente sostiene que el Tribunal Colegiado debió realizar un control difuso de la constitucionalidad del artículo 171 de la Ley de Amparo, ya que este infringe el derecho humano de *tutela judicial efectiva*.

Esta Primera Sala estima que los argumentos reseñados resultan **infundados e inoperantes**.

a. Tutela judicial efectiva

En la resolución del diverso **amparo directo en revisión *******, esta Primera Sala analizó el artículo 171 de la Ley de Amparo a la luz del derecho de acceso a la justicia, por lo que en este apartado se retoman las consideraciones de aquel precedente⁹.

El juicio de amparo es un medio de control extraordinario de la Constitución Federal, que sirve para impugnar los actos de autoridad que sean contrarios a la misma en lo relativo a los derechos fundamentales de los gobernados; esto implica que el objeto del amparo se traduce en hacer respetar los imperativos constitucionales en beneficio del gobernado, con la finalidad de controlar el orden constitucional. Así, la imposición de observar los derechos otorgados por la Norma Fundamental tiene el alcance de lograr que se restituya a la quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados.

Para garantizar la eficacia del juicio de amparo, de acuerdo a su naturaleza y objetivo, la procedencia de la acción no es irrestricta, antes bien, está determinada en el orden constitucional federal, en los artículos 103 y 107 de la Constitución General; y es sobre esa base constitucional que el amparo judicial se rige bajo normas estrictas que encuentran su fundamento en la fracción III del artículo 107 citado:

⁹ Similares consideraciones también se sostuvieron en los diversos amparos directos en revisión 636/2014 y 637/2014.

“Artículo 107. Las controversias de que habla el Artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

[...]

III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

a) *Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.*

La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse

valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; [...]”

En el último párrafo del inciso a) de la norma transcrita, consta que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva; asimismo, como caso de excepción, establece que dicho requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado.

En cuanto a la preparación de las violaciones procesales, el artículo 171 de la Ley de Amparo reglamenta lo siguiente:

“Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.

Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.

A partir de lo anterior, esta Primera Sala considera **infundados** los planteamientos de inconstitucionalidad propuestos por la recurrente, pues el requisito impuesto en el primer párrafo del artículo 171 de la Ley de Amparo, para hacer valer violaciones procesales en amparo directo contra la sentencia definitiva, consistente en que la quejosa debe haberlas impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa señalado en la ley ordinaria respectiva, no es una medida que vulnere el derecho de acceso a la justicia.

El derecho de acceso a la justicia es parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Por derecho a la tutela jurisdiccional puede entenderse, en sentido amplio, el derecho de las personas a formular pretensiones y a defenderse de ellas ante un órgano jurisdiccional, a través de un juicio en el que se respeten las garantías del debido

proceso, en el que se emita una sentencia y en su caso, se logre su plena y efectiva ejecución.¹⁰

Este derecho a la tutela jurisdiccional ha sido desarrollado por la jurisprudencia nacional e internacional, especialmente por la emanada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.¹¹

El derecho a la tutela jurisdiccional puede disgregarse en varios subconjuntos integrados por haces de derechos específicos, a saber: el derecho de acceso a la justicia, el derecho al debido proceso, el derecho a obtener una sentencia jurisdiccional y el derecho a la plena eficacia o ejecución de la misma.

Cada uno de esos subconjuntos despliega sus efectos tutelares en momentos distintos. El derecho de acceso a la justicia, al plantear una pretensión o defenderse de ella, ante tribunales que deben contar con determinadas características¹². El derecho al debido proceso, durante el desahogo del procedimiento (conocer el inicio del juicio, derecho a probar y derecho a alegar). El derecho a obtener una

¹⁰ El derecho a la tutela jurisdiccional está previsto en nuestro sistema jurídico en los artículos 17 constitucional y en el sistema interamericano en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¹¹ Ver, por ejemplo, las sentencias emitidas por la Corte IDH en los casos Reverón Trujillo vs. Venezuela, caso Furlán y familiares vs. Argentina, caso Vélez Loo vs. Panamá y caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, entre otras. Y respecto de las tesis emitidas por la SCJN, pueden citarse, entre otras, las siguientes: 2a./J. 192/2007; 1a. XII/2011 (10a.); 1a. CXCVI/2009; 2a. CV/2007; 1a./J. 42/2007; 1a. LV/2004.

¹² De aquí que este derecho tenga una doble dimensión: una subjetiva, en tanto derecho de una persona y otra objetiva o institucional, relativo a las características y principios mínimos que deben tenerse en cuenta en el diseño institucional de los tribunales para garantizar el derecho. Por ejemplo, la creación de instituciones y prácticas que favorezcan la independencia o la imparcialidad judicial, como la recusación o las excusas por impedimento, la inamovilidad judicial, etc.

sentencia en el momento conclusivo del juicio (fundada en derecho). Y el derecho a la eficacia y ejecución de la misma, una vez concluido el juicio.

Hay también un derecho transversal a estos subconjuntos que conforman el derecho a la tutela jurisdiccional, consistente en la remoción de todos los obstáculos *injustificados* para acceder a la justicia, para el debido proceso, para el dictado de una sentencia fundada en derecho y para su plena ejecución.

A su vez, estos subconjuntos del derecho a la tutela jurisdiccional pueden analizarse a partir de elementos más básicos. Por ejemplo, el derecho de acceso a la justicia, puede disgregarse en los siguientes elementos mínimos: derecho a un Juez competente; derecho a un Juez imparcial e independiente; justicia completa, pronta y gratuita; y el derecho a un recurso efectivo.

Los Estados tienen el deber de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva mediante distintos mecanismos legales que satisfagan los estándares mínimos descritos en los párrafos precedentes.

Los estándares mínimos del derecho a un recurso efectivo, tal y como se ha sostenido en la jurisprudencia nacional e internacional citada, implican no sólo el que esté previsto formalmente en la ley sino el que materialmente sea idóneo para lograr el objetivo para el que fue

diseñado, es decir, para obtener una tutela efectiva en contra de actos o normas lesivas de derechos fundamentales.¹³

La obligación positiva de los Estados¹⁴ de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de los derechos fundamentales, como componente del derecho al acceso a la justicia, comprende también el reconocimiento de una libertad configurativa de los Estados para diseñar internamente los recursos, lo que incluye prever también requisitos de procedencia de los recursos, siempre y cuando persigan una finalidad legítima y sean necesarios, adecuados y proporcionales.

Las formalidades procesales son *precisamente* las que hacen posible arribar a una adecuada resolución, por razones de seguridad jurídica y para la correcta y funcional administración de justicia, de modo que el derecho del gobernado a que se le imparta justicia, es correlativo de una obligación, consistente en que él se sujete a los requisitos que exijan las leyes procesales. Por lo tanto, si verificados los presupuestos formales de admisibilidad se concluye que el recurso intentado no es procedente, ello no es violatorio, por sí mismo, del derecho al acceso a la justicia.

Así lo ha sustentado esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) de rubro: **“DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS**

¹³ Ver, por todas, la sentencia emitida por la Corte IDH en el caso Reverón Trujillo vs. Venezuela.

¹⁴ Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, § 52.

FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL”.¹⁵

En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ha dicho que los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole¹⁶, agregando, en el caso *Castañeda Gutman Vs México*, que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la Convención Americana sobre derechos Humanos¹⁷.

Es decir, el hecho de que algún recurso jurisdiccional esté supeditado a cumplir con determinados requisitos para su procedencia, no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental, y que por ello deba declararse procedente lo improcedente, tal como lo determinó esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) de rubro: **“PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA**

¹⁵ Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, página 325, registro digital 2005917.

¹⁶ Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, § 126; Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, nota de pie n.º 30.

¹⁷ Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, § 94.

PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA”.¹⁸

A partir de lo anterior, es inexacto que el supuesto normativo contemplado en el artículo 171 de la Ley de Amparo, vulnere dichas prerrogativas constitucionales y convencionales.

De acuerdo con la arquitectura de nuestro sistema constitucional, es el legislador quien debe determinar, *de manera específica*, a través de qué juicios, procedimientos, recursos y *medios legales de defensa* se garantiza y desarrolla el derecho de acceso a la justicia previsto en la norma constitucional. Es decir, la Constitución establece un derecho de acceso a la justicia que puede y debe ser garantizado y desarrollado por el legislador en los términos que estime pertinentes, siempre y cuando respete su núcleo esencial.

En el caso, el artículo 171 de la Ley de Amparo establece que al reclamarse una sentencia definitiva en un juicio de amparo directo, deben hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.

Ciertamente puede decirse que, conforme a esa regla, se condiciona el estudio de los conceptos de violación relacionados con

¹⁸ Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, página 487, registro digital 2005717.

violaciones al procedimiento, a que éstas hayan sido impugnadas por los medios de defensa establecidos en las leyes ordinarias.

Lo anterior corresponde con la naturaleza del juicio de amparo, como medio extraordinario para el mantenimiento del orden constitucional, pues en razón de ese carácter, no se justifica acudir a él para la reparación de las violaciones cometidas en el procedimiento, si en las leyes ordinarias se prevé algún remedio legal, por el cual pueden repararse.

Ello es así, pues si en las leyes ordinarias ya existe algún medio ordinario de defensa por el cual es posible combatir la violación cometida, es evidente que la parte afectada tiene la carga de impugnarla a través de esos medios ordinarios o, de lo contrario, opera la preclusión de su derecho a inconformarse con la mencionada violación.

En esa virtud, cuando el afectado no logra la reparación pretendida con los medios de defensa, entonces se le concede la facultad para hacerla valer en el medio extraordinario del amparo. Pero cuando no es así, porque el afectado no cumple la carga de impugnar las violaciones según las reglas del procedimiento a que se encuentra sujeto, entonces su derecho de impugnación se pierde o precluye.

Esto es lo que justifica que, conforme a la norma impugnada, no proceda el análisis de violaciones procesales respecto a las cuales no

se hayan agotado los recursos o medios de defensa ordinarios, ya que no sería válido combatir en amparo una violación procesal sobre la cual ya no se tiene derecho de impugnación, según las reglas del procedimiento del que emana el acto reclamado. Por tanto, la norma no es arbitraria ni constituye un obstáculo irracional para la procedencia del estudio, en el amparo directo, de las violaciones cometidas durante el procedimiento.

De ahí que, en tales casos, se justifique la omisión del estudio de los conceptos de violación atinentes, pues al margen de que la violación se haya cometido realmente o no, la quejosa perdió su derecho de defensa debido a su propia incuria, por no haber agotado los recursos o medios de defensa establecidos en la ley ordinaria.

Además, si se considera que con esa conducta se consiente la violación cometida en su contra, con lo anterior también puede establecerse que el vicio quedaría purgado.

De esa suerte, la afectación al derecho de tutela judicial efectiva con motivo de las violaciones procesales cometidas contra el quejoso, no es imputable a la norma impugnada, sino a la propia conducta del afectado, cuando omite incumplir las cargas que le corresponden.

En ese sentido, esta Primera Sala considera que establecer requisitos de procedencia, previo a instar el juicio constitucional, no es violatorio del derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, pues lo

que la Constitución no permite es que esas limitaciones sean excesivas y desproporcionadas. La analizada en este caso no tiene estas características, porque la parte quejosa conserva la posibilidad real de interponer los recursos correspondientes en contra de las violaciones procesales acaecidas dentro de un procedimiento natural, incluso, de acudir al juicio de amparo indirecto en caso de que este sea procedente.

Por tal motivo, ese requisito de impugnación no constituye simplemente una formalidad vacía de contenido, sino que es un instrumento necesario para que el derecho se realice objetivamente a partir de la activación del amparo judicial, por lo que se estima que la porción normativa impugnada es adecuada para cumplir con la tutela del derecho fundamental de acceso a la justicia y además, respeta el principio *pro actione*, pues la exigencia en ella establecida, de preparar las violaciones procesales, no implica un rigorismo que haga nugatorio dicho principio.

En suma, esta Primera Sala ha considerado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes, como son los requisitos de procedencia, no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos supuestos formales son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo.

Por todo lo anterior, no asiste razón al recurrente cuando propone la inconstitucionalidad del artículo 171 de la Ley de Amparo por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Por otro lado, esta Primera Sala estima que es **inoperante el primer agravio**, donde el recurrente sostuvo que el Tribunal Colegiado no realizó un análisis oficioso del artículo 171 de la Ley de Amparo, al ser violatorio del derecho de tutela judicial efectiva. Lo anterior, en virtud de que en párrafos precedentes esta Primera Sala arribó a la constitucionalidad del precepto en comento.

b. Reserva de ley

Como se vio en el apartado anterior, los requisitos de procedencia previstos en el artículo 171 de la Ley de Amparo para instar el juicio constitucional, consistentes en que el quejoso agote los medios de defensa previstos en la legislación ordinaria y que la violación procesal trascienda al resultado del fallo, no sólo son acordes al orden constitucional y convencional, sino que son una reproducción casi idéntica del artículo 107 constitucional.

Contrario a lo sostenido por el recurrente, esta Sala advierte que ambas condiciones previstas en la Ley de Amparo son acordes al principio de reserva de ley; el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Constitución establece que procede el juicio de amparo cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, sólo contra *sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan*

fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo (...) Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva.

La previsión establecida en el primer párrafo del artículo 171 de la Ley de Amparo, en el sentido de que es necesario que se agote el principio de definitividad para que se puedan analizar violaciones al procedimiento en amparo directo, así como que estas deberán trascender al resultado del fallo, refleja de manera idéntica el mandato previsto en el inciso a), fracción III del artículo 107 del texto constitucional.

Además, debe recordarse que conforme al referido artículo Constitucional, el análisis de las violaciones procesales solicitado por el quejoso, es verificable cuando (i) se hayan hecho valer, en el entendido de que fueron impugnadas en el momento procesal oportuno, de acuerdo al cuarto párrafo de la fracción en estudio; o, (ii) cuando así lo advierta en suplencia de la queja.

En este tenor es que deviene **infundado** lo alegado por el recurrente en el sentido de que la Ley Reglamentaria en la materia va más allá del texto constitucional vulnerando los principios de reserva

de ley y subordinación jerárquica, pues la norma no hace más que reiterar un concepto previsto en la Constitución.

c. Error judicial

Por otro lado, deviene **inoperante** lo argumentado en el sentido de que el artículo 171 de la Ley de Amparo es inconstitucional al exigir al gobernado que combata por los medios ordinarios el “error judicial”, esto, en virtud de que el artículo en cuestión no prevé esta exigencia.

d. Suplencia de la queja deficiente

Finalmente, en el **tercer agravio**, el recurrente alega que debió operar en su favor la suplencia de la queja, pues es un adulto mayor enfermo y a pesar de ello, el Tribunal Colegiado le negó dicha suplencia afirmando que únicamente opera para menores de edad e incapaces.

El argumento es **inoperante**

Esto pues si bien el Tribunal Colegiado no atendió frontalmente a la petición en torno a la procedencia de la suplencia de la queja en tratándose de adultos mayores enfermos, lo cierto es que, en esta instancia, esta Primera Sala no advierte queja deficiente por suplir.

2. Primer agravio

En el **primer agravio**, el recurrente sostiene que le causa perjuicio la aplicación del artículo 171 de la Ley de Amparo; argumenta que se trasgrede su derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial

efectiva en virtud de que los argumentos formulados en el escrito de amparo no fueron debidamente analizados, siendo que la violación procesal trasciende a nivel constitucional y que el Tribunal Colegiado debió inaplicar dicho precepto.

Este argumento deviene **inoperante** pues versa sobre cuestiones de legalidad relativas a la aplicación del artículo 171 de la Ley de Amparo en la sentencia recurrida.

En razón de las consideraciones anteriores, al ser infundados e inoperantes los motivos de disenso formulados en esta instancia, lo procedente es **confirmar** la sentencia recurrida y **negar** el amparo y protección solicitados.

Por lo expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

RESUELVE:

PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **Mario Tinajero López**, en contra de la sentencia dictada el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, en el toca *********, por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvase los autos relativos al lugar de su origen; y, en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández (Presidenta y Ponente).

Firman la Ministra Presidenta de la Sala y Ponente con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA Y PONENTE

MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ

**SECRETARIA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA**

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA

“En términos de lo previsto en los artículos 3º, fracción II, 13, 14 y 18, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.

/emg